

CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2018
COMPLEMENTO AL ORDEN DEL DÍA Nº 165

Impreso el día 11 de mayo de 2018

SUMARIO

COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES, Y
DE ECONOMIAS REGIONALES, ECONOMIA SOCIAL, MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Informe de la disidencia parcial de la señora senadora Fiore Viñuales
referido al expediente CD-5/18 (S-1546/18).

DISIDENCIA PARCIAL

Honorable Senado:

El proyecto de ley que se pretende sancionar tiene como objetivo la eliminación y simplificación de normas en diversos regímenes, destinados a brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas para el ejercicio del comercio, el desarrollo de la industria y de la actividad agroindustrial, entre otros aspectos.

Este proyecto introduce modificaciones en diferentes leyes, decretos y reglamentaciones, que abarcan las siguientes materias: desarrollo del capital emprendedor, societaria, fiduciaria, industrial, obras de arte, promoción del trabajado, acceso al crédito, sistema métrico legal, marcas y patentes, energía, agroindustria y seguros.

No obstante esta valoración general, entiendo que existen algunos puntos que debieran considerarse de forma particular.

De esta manera, considero pertinente fundamentar mi disidencia parcial en el dictamen de mayoría, explicitando algunas consideraciones sobre los artículos que detallaré a continuación:

- 1) En el artículo 2º del capítulo I del presente proyecto, por el que se modifica el artículo 17 de la ley 27.349, se proponen dos modificaciones:

En el inciso b) no se hace referencia específica a las micro, pequeñas y medianas empresas, cuando se refiere al monto máximo a financiar con aportes no reembolsables (ANR). Se propone la siguiente redacción:

b) Aportes no reembolsables (ANR): para emprendimientos, micro, pequeñas y medianas empresas, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de incubación o aceleración de empresas, siempre que exista una contrapartida de aportes del beneficiario del ANR, en los términos que establezca la reglamentación. La reglamentación deberá contemplar que los ANR para emprendimientos, micro, pequeñas y medianas empresas y las instituciones de capital emprendedor tendrán un tope máximo de hasta el setenta por ciento (70%) del aporte total, mientras que para las instituciones que ofrezcan servicios de incubación, el monto del ANR podrá cubrir hasta el cien por ciento (100%) dependiente del tipo de proyecto y la ubicación geográfica.

En aquellos casos en los que, por las características del proyecto, no sea viable instrumentar un préstamo, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor podrá otorgar fondos sin requisitos de devolución. La evaluación del proyecto deberá hacer especial hincapié en los elementos considerados al momento de corroborar que el destinatario disponga de las capacidades técnicas para llevar adelante el proyecto. La totalidad de los aportes no reembolsables (ANR) que se otorguen no podrán superar el treinta por ciento (30%) del total de los fondos administrados por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor.

El inciso d) del mismo artículo 2° del capítulo I, hace referencia al inciso 6, del artículo 19 de la ley 27.349, cuando en realidad dicho inciso no existe y debiera referir al inciso 4.

Por lo tanto, se propone la siguiente redacción:

d) Otros instrumentos de financiamiento: podrán emplearse otros instrumentos de financiamiento a determinar por la autoridad de aplicación, siempre y cuando permitan financiar proyectos con los destinos previstos en la presente ley. En particular, podrá otorgar asistencia financiera a emprendedores en el marco del programa “Fondo Semilla” que se crea por medio de esta ley, en las convocatorias que realice la autoridad de aplicación de dicho programa. En este caso, el consejo asesor previsto en el artículo 63 de la presente, sustituirá al previsto en el inciso 4 del artículo 19 de la presente.

2) En cuanto al capítulo III, en el cual se plantean modificaciones a la ley 24.467 de pequeña y mediana empresa y específicamente en lo referente a las sociedades de garantía recíproca (SGR), desde el Poder Ejecutivo nacional buscan que el sistema de garantías argentino crezca y se fortalezca. De manera tal que se otorguen cada vez más garantías a empresas. También pretenden generar un mayor equilibrio entre la banca pública y la privada a la hora de acompañar el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Si bien comparto el objetivo general de estas modificaciones, también es cierto que el alcance de las mismas no podrá apreciarse con totalidad hasta que la ley sea reglamentada.

No obstante lo antes expuesto, mi mayor preocupación se centra en la modificación propuesta a través del artículo 15 del presente proyecto, mediante el cual se incorpora un tercer párrafo al artículo 71 de la ley 24.467:

Artículo 15. – Sustitúyese el artículo 71 de la ley 24.467, por el siguiente:

Artículo 71: *De la contragarantía.* Las sociedades de garantía recíproca (SGR) deberán requerir contragarantías por parte de los socios partícipes y de los terceros en respaldo de los contratos de garantías con ellos celebrados.

El tomador del contrato de garantía recíproca deberá ofrecer a la SGR algún tipo de contragarantía en respaldo de su operación.

La SGR podrá exceptuar del requisito de contragarantías a tipos determinados de operaciones con carácter general, así como a operaciones particulares.

Las contragarantías representan otro punto crucial del sistema y también está expresado en su nombre cuando se las llama de “garantía recíproca”. Quiere decir, que si bien una SGR les va a otorgar una garantía o aval a sus socios partícipes, por otro lado deberá requerir sin excepción a los mismos que otorguen una garantía a favor de la SGR; es decir, una contragarantía. De esta manera la sociedad se asegura que en caso de que la pequeña y mediana empresa incumpla con su obligación, poder recuperar el dinero que tuvo que aportar para honrar la deuda avalada.

Por lo tanto, propongo suprimir el último párrafo del artículo 15 del proyecto, por el que se modifica el artículo 71 de la ley 24.467, debido a la discrecionalidad que tales disposiciones implican, sin que en la exposición de motivos del DNU originante de la presente exista alguna fundamentación al respecto.

3) Del análisis del capítulo VII – “Obras de arte” – propongo la eliminación del artículo 43, por el que se sustituye el artículo 5° de la ley 24.633, ya que el texto propuesto en el C.D.–5/18 es exactamente el mismo que el de la ley original.

4) En el caso particular del capítulo VIII – “Promoción del trabajo” –, por el que se modifica la ley 26.940, sobre el Registro Único de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), debemos recordar que el registro fue creado en el año 2014 en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (en adelante, MTESS) a los fines de incluir a los empleadores con sanciones laborales firmes aplicadas por el MTESS, la AFIP, las autoridades provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires (AGIP), el Registro Nacional de los Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Entre las sanciones que pueden dar lugar a la inclusión en REPSAL podemos mencionar al Trabajo no registrado, incumplimientos de la retención de aportes, falta de registración o inscripción como empleador, obstrucción a la inspección de las autoridades del trabajo, sentencias judiciales por relaciones laborales no reconocidas por el empleador, infracciones a la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente y Trata de Personas, entre otras.

En función de lo anterior, los empleadores que estén incluidos en el REPSAL tienen vedado el acceso a programas y beneficios financiados por el Estado nacional. Asimismo, no podrán acceder a líneas de crédito otorgadas por instituciones bancarias públicas, celebrar contratos de diversa índole con el Estado nacional, participar en concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias, como tampoco a los beneficios de aportes y contribuciones reducidos para microempleadores o de reducción para nuevos trabajadores.

Cabe destacar que, para ser excluidos del registro, los empleadores debían acreditar el cumplimiento de las sanciones económicas que les hubieran sido impuestas (multas) y regularizar la conducta que dio lugar a la sanción.

Las modificaciones introducidas a través del proyecto son las siguientes:

- Se reduce a 30 días el plazo de permanencia en el REPSAL en los casos en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción.
- Se incorpora el artículo 8° bis a la ley 26.940, que dispone un plazo de 30 días corridos máximo para que los organismos competentes para la anotación en el REPSAL efectivicen su inscripción en el registro desde que la sanción quede firme. Vencido dicho plazo, automáticamente comenzará a correr el plazo de permanencia en el REPSAL, independientemente de si se hubiera incluido o no la sanción firme en el registro por las autoridades responsables.
- En los supuestos en que el empleador regularice su inscripción o relación de trabajo y pague las multas, será incluido en el REPSAL hasta la fecha en que se haya pagado la multa y/o regularizado, y 30 días corridos más a contar desde que se encuentra cumplimentada la obligación.
- Se deroga el artículo 10 de la ley 26.940, que condenaba a las empresas infractoras que, hubiesen incurrido en “obstrucción a la labor de la inspección del trabajo” a permanecer en el registro por 180 días más, una vez regularizados sus pagos pendientes.

En el marco de la ley 26.940 – Promoción del Trabajo Registrado y en Prevención del Fraude Laboral –, el REPSAL tiene el doble objetivo de lograr la reducción del empleo no registrado y registro de forma precaria.

En función de lo expuesto, considero que las modificaciones propuestas, al flexibilizar y unificar en el aspecto sancionatorio conductas sumamente disímiles y de gravedad diversa como si fuesen idénticas, distan de propender a lograr el objetivo perseguido, ya que se encaminan en detrimento de una verdadera herramienta de sanción para incumplidores, como es el REPSAL.

- 5) Por último, del análisis del capítulo X – “Marcas y patentes” – se observa que en el artículo 91 se propone la sustitución del inciso *k*) del artículo 92 de la ley 24.481 y sus modificatorias (t.o. 1996).

Sin embargo, el inciso *k*) no existe en el artículo 92 de la ley 24.481, por lo que se propone la siguiente redacción:

Artículo 91: Incorpórese como inciso *k*) del artículo 92 de la ley 24.481 y sus modificatorias (t.o. 1996), el siguiente texto:

“*k*) Reglamentar el procedimiento de patentes de invención y modelos de utilidad, en todo aquello que facilite el mismo, adaptar requisitos que resulten obsoletos por la implementación de nuevas tecnologías y simplificar el trámite de registro a favor del administrado y la sociedad en su conjunto”.

Con lo expuesto anteriormente, considero fundamentada mi disidencia parcial al dictamen O.D.-165/18

Cristina Fiore Viñuales

***VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCIÓN UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL**